

Resumen de “Breve historia contemporánea de la Argentina” **(Romero)**

Capítulo 6 – “Dependencia o Liberación, 1966-1976”

Un amplio consenso acompañó al golpe del 28 de junio de 1966: Los grandes sectores empresarios y también los medianos y pequeños, la mayoría de los partidos políticos y hasta muchos grupos de extrema izquierda, además del peronismo en general. Este crédito amplio tenía que ver con la indefinición inicial entre las diversas tendencias que coexistían en el gobierno. Por un lado, se encontraba una vertiente liberal vinculada al *establishment* económico; por otro, había una línea más tradicional, entre nacionalista y corporativista (en esta línea se ubicaba el propio Onganía).

Más allá de las contradicciones entre estos grupos, por el momento primaron las coincidencias. Era necesario reorganizar el Estado, hacerlo fuerte con autoridad y recursos, y controlable desde su cima.

La primera fase del nuevo gobierno se caracterizó por un “*shock* autoritario”. Se proclamó el comienzo de una etapa revolucionaria, y a la Constitución se le adosó un Estatuto de la Revolución Argentina, por el cual juró el general Juan Carlos Onganía, presidente designado por la Junta de Comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970. Se disolvió el Parlamento y los partidos políticos, cuyos bienes fueron confiscados y vendidos. Los militares mismos fueron apartados de las decisiones políticas, aunque en cuestiones de seguridad se institucionalizó la representación de las armas por la vía de sus comandantes. Los ministerios fueron reducidos a cinco y se creó una suerte de Estado Mayor de la Presidencia, integrado por los Consejos de Seguridad, Desarrollo Económico y Ciencia y Técnica, pues en la nueva concepción el planeamiento económico y la investigación científica se consideraban insumos de la seguridad nacional.

La represión del comunismo se extendió a todas aquellas expresiones del pensamiento crítico o de disidencia. El blanco principal fue la universidad, que era vista como el lugar típico de la infiltración del comunismo. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica. El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la policía irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a alumnos y profesores. A esto siguió un movimiento importante de renunciaciones de docentes que, muchos de los cuales continuaron con sus trabajos en el exterior. Así pues, en las universidades reaparecieron los grupos tradicionalistas, clericales y autoritarios.

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la Iglesia, eran la

antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía, el divorcio.

Antes de que se hubiera definido una política económica, se procedió a reducir de manera drástica al personal en la administración pública y en algunas empresas del Estado, como los ferrocarriles, y se realizó una sustancial modificación de las condiciones de trabajo en los puertos, para reducir los costos. Se cerró la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, que venían siendo ampliamente subsidiados, con el fin de racionalizar la producción.

En todos los casos, la intensa protesta sindical fue acallada con violencia y se sancionó una ley de arbitraje obligatorio, que condicionaba la posibilidad de iniciar huelgas.

En febrero de 1967, desde el sindicalismo se lanzó un Plan de Acción. Sin embargo, fue respondido con mucha fuerza: despidos masivos, retiros de personería sindical, intervenciones a los sindicatos y el uso de todos los resortes que la ley le daba al Estado para controlar al gremialismo díscolo. El paro tuvo por otra parte escasa participación y la CGT debió reconocer su derrota total y suspender las medidas.

El gobierno había encontrado la fórmula política adecuada para operar la gran reestructuración de la sociedad y la economía. Con la clausura de la escena política y la corporativa, había puesto fin a la puja sectorial. Acallado cualquier ámbito de expresión de las tensiones de la sociedad, podía diseñar sus políticas con tranquilidad.

Sin embargo, en los primeros seis meses no se había adoptado un rumbo claro en materia económica. En diciembre de 1966, el general más afín al sector liberal del Ejército, Julio Alsogaray –hermano de Álvaro- fue designado comandante en jefe y Adalbert Krieger Vasena, ministro de Economía y Trabajo. Krieger ocupó el centro del gobierno, pero debió serguir enfrentándose con los grupos corporativistas, que se concentraron en el Ministerio de Interior y la Secretaría General de la Presidencia.

El plan de Krieger Vasena, lanzado en marzo de 1967, coincidiendo con la debacle de la CGT, apuntaba en primer término a superar la crisis cíclica y a lograr una estabilización prolongada que eliminara una de las causas de la puja sectorial. A largo plazo, se proponía racionalizar el funcionamiento de la economía toda y facilitar así el desempeño de las empresas más eficientes.

En el caso de la inflación se recurrió a la autoridad estatal para regular las grandes variables, asegurar un período prolongado de estabilidad y desalentar las expectativas inflacionarias. Sometidos los sindicatos, se congelaron los salarios por dos años y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes. El déficit fiscal se redujo con las racionalizaciones de personal y una recaudación más estricta, pero sobre todo porque se estableció una fuerte devaluación del 40 % y una retención similar sobre las exportaciones agropecuarias.

Así, se logró arreglar las cuentas del Estado, evitar el alza de los alimentos, impedir que la devaluación fuera aprovechada por los sectores rurales y asegurar un período prolongado de estabilidad monetaria, reforzado por préstamos del FMI y una importante corriente de

inversiones de corto plazo. Ello permitió establecer el mercado libre de cambios. Las inversiones del Estado fueron considerables, particularmente en obras públicas: la represa hidroeléctrica de El Chocón, puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la Capital.

Las exportaciones no tradicionales fueron beneficiadas con reintegros de impuestos a insumos importados. Se estimuló la eficiencia general de la economía mediante una reducción de los aranceles y la eliminación de subsidios a economías regionales, como la azucarera tucumana o la aldogonera chaqueña.

Como resultado, creció el producto bruto (PBI), la desocupación fue en general baja –si bien se crearon bolsones de alto desempleo–, los salarios no cayeron notablemente y la inversión en general fue alta, aunque concentrada en obras públicas.

El sector más concentrado –fundamentalmente extranjero– resultó el principal beneficiario de esta política; estas empresas, instaladas en la época de Frondizi, empezaron a producir a pleno, comprando además empresas nacionales, produciéndose así una desnacionalización de la economía.

La lista de perjudicados fue amplia: los sectores rurales se consideraron despojados por las fuertes retenciones a la exportación; el empresariado nacional se quejaba de la falta de protección y se lamentaba de la desnacionalización; economías provinciales enteras (Tucumán, Chaco, Misiones) recibieron golpes durísimos al suprimirse las protecciones tradicionales. Asimismo, amplios sectores medios fueron perjudicados por la liberación de los alquileres urbanos y el avance de los supermercados. El sector trabajador, por supuesto, resultó enormemente perjudicado por el conjunto de las medidas económicas. La nueva política modificaba profundamente los equilibrios de la etapa del empate, y volcaba la balanza en favor de los grandes empresarios.

A lo largo de 1968, empezaron a notarse los primeros indicios del fin de la *pax romana*. En marzo, un grupo de sindicalistas contestatarios, encabezados por Raimundo Ongaro, ganó la conducción de la CGT, aunque de inmediato los dirigentes más tradicionales la dividieron. A lo largo de este años, la CGT de los argentinos (dirigida por Ongaro) encabezó un movimiento de protesta que el gobierno pudo controlar combinando amenazas y ofrecimientos.

Por el otro lado, se reunió otra vertiente de sindicalistas que unió al tradicional núcleo vanguardista y a los llamados “participacionistas”, dispuestos, a aceptar las reglas del juego impuestas por el régimen, y a negociar. En esta vertiente depositaba sus esperanzas el régimen dictatorial, a fin de tener una CGT domesticada.

Estas líneas sindicalistas, en conjunción con sectores rurales y el empresariado nacional, pusieron en tensión la relación entre el presidente y Kriger Vasena. A mediados de año, Onganía relevó a los tres comandantes y reemplazó a Julio Alsogaray por Alejandro Lanusse.

Las voces del *establishment* salieron a defender a Kriger Vasena y comenzaron a quejarse del excesivo autoritarismo de Onganía.

Cuando en Mayo de 1969 estalló un fuerte movimiento de protesta, conocido como “el Cordobazo”, el único capital político de Organía, el mito del orden, se desvaneció.

Este estallido vino precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de provincias y de una fuerte agitación sindical en Córdoba, centro industrial donde se concentraban las principales fábricas de automotores. Activismo estudiantil y obrero se conjugaron el 29 de mayo de 1969. La CGT local realizó una huelga general y grupos de estudiantes y obreros ganaron el centro de la ciudad, donde se sumó mucha otra gente. La fortísima represión policial generó un violento enfrentamiento: hubo barricadas, hogueras y asaltos a negocios. La multitud controló varias horas el centro de la ciudad, hasta que finalmente intervino el Ejército. El 31 de Mayo se restableció el orden.

La ola de movilización social que inauguró el Cordobazo dio paso a una nueva línea sindical, de índole clasista. Ésta se desarrolló principalmente en Rosario y en Córdoba. Con obreros estables, especializados y relativamente bien pagos, los reclamos se extendieron a las condiciones de trabajo, los ritmos, los sistemas de incentivos, las clasificaciones y categorías.

Esta corriente estaba representada por los sindicatos de Fiat (SITRAC / SITRAM) y por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Se trataba de una acción gremial fuertemente transgresora, al borde de la violencia, que incluía ocupaciones de plantas y toma de rehenes, y que tenía una gran capacidad para movilizar al resto de la sociedad.

Poco después del Cordobazo hubo episodios similares en Rosario – el Rosariazo- y en Cipolletti; los episodios se repitieron luego en Córdoba, en 1971, en Neuquén y en General Roca, y adquirieron una magnitud notable en Mendoza, en 1972. La misma agitación se advertía en las zonas rurales, como el Chaco, Misiones o Formosa, donde arrendatarios y colonos se organizaban en Ligas Agrarias. Las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras, a las que se sumaban los estudiantes universitarios en permanente estado de ebullición.

Estas formas originales de protesta, que surgían de cuestiones más vinculadas a la vida cotidiana antes que laborales –la vivienda, el agua, la salud-, movilizaban a sectores mucho más vastos que el de los obreros sindicalizados: desde trabajadores ocasionales, no agremiados, hasta sectores medios cuya participación era algo novedoso, y que se manifestaba también en las huelgas de maestros y profesores, empleados públicos, funcionarios judiciales o en los *lock out* de pequeños comerciantes e industriales.

Se trataba de un coro múltiple, heterogéneo pero unitario, al que se sumaban las voces de otros intereses heridos, como los grandes productores rurales o los sectores nacionales del empresariado. Se fue dando, pues, un período de movilización social de gran magnitud, una verdadera “primavera de los pueblos” en contra de un enemigo común: el poder autoritario y los grupos minoritarios que lo apoyaban.

Esto coincidía con una ola de descontento que se venía dando a nivel mundial. Se expresó

en Praga, México, Berkeley, o en el mayo francés del año '68.

El pueblo de Vietnam generaba una resistencia inaudita frente a la invasión estadounidense, a la vez que esta guerra despertaba grandes reacciones internas en los Estados Unidos por parte su propia sociedad. Por otro lado, la Revolución Cultural china organizada por el presidente Mao daba esperanzas de creer en un nuevo comunismo distinto al soviético.

En América Latina, Cuba constituía el mejor ejemplo de la única alternativa a la dependencia era la revolución, que conduciría a la liberación. La acción del Che Guevara en Bolivia mostraba las posibilidades y límites del "foco" revolucionario, pero sobre todo su muerte fue el símbolo más fuerte de quienes luchaban por la liberación.

En el mismo frente, se alineaban las guerrillas urbanas del Brasil o del Uruguay (tupamaros), los partidos marxistas chilenos que llevaron a Salvador Allende a la presidencia o militares nacionalistas y populistas como el boliviano Torres, el panameño Torrijos o el peruano Velasco Alvarado. Hasta la Iglesia se sumaba, en parte, a esta primavera. En 1967, los obispos del Tercer Mundo proclamaron su preocupación por los pobres, así como la necesidad de comprometerse en forma activa en la reforma social y asumir las consecuencias de ese compromiso.

Desde 1968, los religiosos que se reunieron en el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, y los laicos que lo acompañaban, militaron en las zonas más pobres (villas de emergencia), promovieron la formación de organizaciones solidarias e impulsaron reclamos y acciones de protesta. Su lenguaje fue haciéndose rápidamente político: la violencia de abajo –decían- se legitimaba por la injusticia social, que también era una forma de violencia. La solidaridad con el pueblo los llevó a identificarse con el peronismo, si bien entraron también en contacto con el marxismo.

Los sacerdotes tercermundistas facilitaron la incorporación a la política y a la militancia de vastos contingentes de jóvenes, educados en colegios religiosos.

Por esa y otras vías, contingentes de jóvenes se incorporaron rápidamente a un activismo inédito. La tradicional política universitaria cambió de forma, de modo que las universidades fueron convirtiéndose en centros de agitación.

Para muchos de estos jóvenes ejerció una atracción muy fuerte el peronismo, donde encontraban el mejor espacio para la contestación.

Se fue gestando una perspectiva política en la que se ubicaba al peronismo dentro del gran proceso de construcción del socialismo.

La Revolución parecía factible. Así lo mostraban Cuba, el Cordobazo y la movilización social. La alternativa democrática estuvo totalmente ausente en las discusiones.

Los discursos políticos predominantes, que mezclaban elementos del marxismo revolucionario con otros del nacionalismo o el catolicismo tercermundista, se nutrieron de la experiencia de la primavera, potenciaron el imaginario popular y lo reforzaron y legitimaron con referencias teóricas. Se comenzó a ver la política desde la lógica de la guerra, en la que participaban dos bandos enfrentados.

Las primeras organizaciones guerrilleras habían surgido al principio de la década de 1960, al calor de la experiencia cubana, pero su verdadero caldo de cultivo fue la experiencia autoritaria.

Desde 1967 fueron surgiendo distintos grupos, pero los dos que tuvieron mayor trascendencia fueron la organización Montoneros, surgida del integrismo católico y nacionalista y devenida peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Su acta oficial de nacimiento a la vida pública fue el secuestro y asesinato del general Aramburu, en mayo de 1970, por obra de Montoneros. Poco después, otra de las organizaciones guerrilleras, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) “coparon” la pequeña ciudad de Garín, cerca de la Capital y los Montoneros hicieron lo mismo con La Calera, en Córdoba. Desde entonces, y hasta en 1973, los actos de violencia fueron en crecimiento. Algunos tenían que ver con el equipamiento de las organizaciones (armas, dinero, material médico); otros, como los copamientos, eran demostraciones de poder; además, no faltaron acciones de “expropiación” y reparto entre los pobres. En muchos casos, las acciones procuraban insertarse en los conflictos sociales y profundizarlos, por ejemplo, secuestrando a empresarios o a gerentes en medio de una huelga. Lo más espectacular fueron los asesinatos: antes de Aramburu, se había asesinado a Augusto Vandor (si bien los autores nunca se revelaron), y luego a José Alonso, otro dirigente sindical destacado.

Entre todas las organizaciones había grandes diferencias teóricas y políticas, pero primaba un espíritu común. Todas aspiraban a transformar la movilización espontánea de la sociedad en un alzamiento generalizado. Asimismo, compartían la lógica de la exclusión: el enemigo debía ser aniquilado.

Montoneros fue la organización más exitosa y la que fue absorbiendo a casi todas las otras organizaciones, a excepción del ERP. Asimismo, fueron la organización que logró el reconocimiento de Perón.

Desde 1971, se volcaron a la organización y movilización de los sectores marginales en barrios, villas, universidades y, en menor medida, en sindicatos, a través de la Juventud Peronista, que tuvo un crecimiento enorme.

El Cordobazo significó un golpe mortal para el gobierno de Onganía, no sólo por la impotencia del Estado frente al desafío social y por las vacilaciones del Ejército, sino porque también impactó en el área económica, ya que se produjo una apresurada salida de capitales extranjeros y reaparecieron las expectativas inflacionarias.

Onganía hizo renunciar a Vasena y trató de apoyarse en los sindicalistas “participacionistas”, pero los sindicalistas se habían vuelto menos dóciles y al mismo tiempo los empresarios desconfiaban de políticas populistas.

El 29 de mayo de 1970, a un año exacto del Cordobazo, Aramburu fue secuestrado y pocos días después se encontró su cadáver.

El episodio no dejó dudas de que había que modificar la situación: en junio de 1970, depusieron a Onganía y designaron como presidente a Roberto Levingston, como

mandatario de la Junta de Comandantes.

Levingston, de tradición nacionalista, designó ministro de Obras Públicas y luego de Economía a Aldo Ferrer, que se propuso reeditar la fórmula nacionalista y populista. Un ministro de Trabajo de raíz peronista negoció con la CGT y hubo un impulso salarial distribucionista. Se protegió a los sectores nacionales del empresariado, por la vía del crédito y de los contratos de las empresas del Estado. Se puso en práctica una política económica sintetizada en la fórmula del “compre argentino” o en la “argentinización del crédito”.

Convocándola a negociar, el gobierno reflató a la CGT que, en octubre de 1970 lanzó un plan de lucha que incluyó tres paros generales, no contestados por el gobierno. Los partidos tradicionales también reaparecieron en el escenario.

A fines de 1970 la mayoría de ellos firmó un documento, La Hora del Pueblo, cuyos artífices fueron el delegado personal de Perón, Jorge Paladino, y Arturo Mor Roig, veterano político radical, que fue la base de su acción conjunta hasta 1973. Allí se acordaba poner fin a las proscripciones electorales y asegurar, en un futuro gobierno democrático, el respeto a las minorías y a las normas constitucionales, además de mínimos lineamientos sobre política económica, de índole nacionalista y distribucionista. Levingston era incapaz de manejar el espacio de negociación que se estaba abriendo: era hostilizado por el establishment económico, estaba enfrentado con los partidos políticos, con la CGT y con los empresarios nacionales.

Por ello, cuando en marzo de 1971 tuvo lugar una nueva movilización de masas en Córdoba, el “viborazo” (en el cual participaron las organizaciones armadas), la Junta de Comandantes decidió su reemplazo por el general Alejandro Lanusse, para conducir el proceso de retirada.

En marzo de 1971, Lanusse anunció el restablecimiento de la actividad política parlamentaria y la próxima convocatoria a elecciones generales, subordinadas a un Gran Acuerdo Nacional (G.A.N), cuyas bases había venido negociando con los dirigentes de La Hora del Pueblo. Este Acuerdo tenía como líneas fundamentales una condena general de la subversión, garantías sobre la política económica y el respeto a las normas democráticas, además de dar un lugar institucional a las Fuerzas Armadas. Pero lo principal era acordar una candidatura presidencial de transición, para lo cual se ofrecía el propio Lanusse. Finalmente, este acuerdo no tendrá éxito.

Mientras tanto, las discrepancias respecto a cómo enfrentar a la guerrilla armada eran crecientes. Algunos sectores del Estado y las Fuerzas Armadas iniciaron una represión ilegal: secuestro, tortura y desaparición de militantes o asesinatos a mansalva, como ocurrió en la denominada “Masacre de Trelew”, en agosto de 1972.

Similares oscilaciones había respecto a la política económica: se disolvió el Ministerio de Economía y se lo repartió en secretarías sectoriales que se confiaron a representantes de cada una de las organizaciones corporativas. Al mismo tiempo, el contexto era de inflación desatada, fuga de divisas, caída del salario real y desempleo, agravado por la ola generalizada de reclamos.

En noviembre de 1971, Perón reemplazó a Paladino por Hector J. Cámpora. Perón se propuso conducir la negociación sin renunciar a ninguna de sus cartas; no resignó su papel de referente de la ola de descontento social ni renunció al apoyo proclamado por buena parte de las organizaciones armadas. Más aún, las alentó y legitimó permanentemente, y, cuando en 1972 se organizó la Juventud Peronista, incluyó a su dirigente más notorio, Rodolfo Galimberti, en su Comando estratégico.

Lanusse planteó en principio que el Acuerdo era condición para las elecciones, pero tuvo que ceder frente a la imposibilidad de obligar a Perón a negociar, consiguiendo, con todo, el objetivo mínimo: que Perón no fuera candidato, a cambio de su propia autoproscripción.

Perón conformó su combinación electoral: el Frente Justicialista de Liberación, cuya fórmula era Hector Cámpora, como presidente, y V. Solano Lima como vicepresidente. La campaña fue fundamentalmente llevada a cabo por el ala contestataria del movimiento, la Juventud Peronista, que rodeaba a Cámpora.

Así pues, la fórmula ganó las elecciones presidenciales de marzo de 1973 con casi el 50 % de los votos. A este triunfo siguió una casi inmediata liberación de los presos políticos condenados por actos de subversión, según lo marcó una ley de amnistía rápidamente aprobada por el Congreso.

El 20 de junio retornará al país Juan Domingo Perón; ese día, cuando se había congregado una enorme multitud en Ezeiza, un enfrentamiento armado entre las distintas tendencias peronistas (la “derecha” peronista y la “izquierda” peronista) provocó una masacre. El 13 de julio, Cámpora y su vice renunciaron, asumiendo la presidencia el de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno de López Rega, el secretario privado de Perón y a la vez ministro de Bienestar Social. En septiembre se realizaron nuevas elecciones y la fórmula Perón-Perón (en la que el líder compartió candidatura con su esposa) alcanzó el 62 % de los votos. El 1ro de julio de 1974 falleció Perón y su esposa lo reemplazó, hasta que fue depuesta por los jefes militares el 24 de marzo de 1976.

El proyecto de Perón se asentaba sobre tres bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con los grandes representantes corporativos y una conducción más centralizada del movimiento, hasta entonces desplegado en varios frentes y dividido en estrategias heterogéneas.

Para que funcionara, se necesitaba que la economía tuviera un desempeño medianamente satisfactorio –las expectativas eran buenas- y que pudiera reforzarse el poder del Estado. Éste era un punto débil, ya que los mecanismos y los instrumentos estaban desgastados y resultaron ineficaces.

El gobierno, finalmente, resultará corroído por la formidable lucha desencadenada dentro del movimiento. Por otro lado, el pacto social funcionó mal casi desde el principio, mientras que el pacto democrático resultó irrelevante, pues no se pudo construir una oposición eficiente ni para suministrar un respaldo al gobierno constitucional.

El Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional, presentado en mayo de 1973, consistía en un intento por superar las limitaciones al crecimiento de una economía cuyos rasgos básicos no se pensaba modificar.

Perón eligió como ministro de Economía a José Gelbard, jefe de la CGE. Sus objetivos eran fuertemente intervencionistas y, en menor medida, nacionalistas y distribucionistas, y no implicaban un ataque directo a ninguno de los intereses establecidos.

Se esperaba apoyar el crecimiento de la economía tanto en una expansión del mercado interno cuanto en el crecimiento de las exportaciones. Las perspectivas de las exportaciones tradicionales eran excelentes: muy buenos precios y la posibilidad de acceder a nuevos mercados, como la Unión Soviética; la nacionalización del comercio exterior apuntaba a asegurar la transferencia de los beneficios al sector industrial, aunque a la vez se cuidó de preservar los ingresos de los sectores rurales, cuya productividad se quiso incrementar combinando alicientes y castigos (al respecto, fue particularmente polémica la potestad que se le dio al Estado de expropiar tierras sin cultivar).

Las empresas nacionales fueron respaldadas con líneas especiales de crédito y con el mecanismo del “compre argentino” en las empresas públicas; para lograr eficiencia y control, éstas se integraron en una Corporación de Empresas Nacionales. Al mismo tiempo, se apoyó grandes proyectos industriales – de “interés nacional”- con subvenciones.

Muchos resortes pasaban por las manos del Estado: el manejo centralizado del crédito y también el control de precios. Además, el Estado aumentó considerablemente sus gastos a través de obras sociales e incrementó el número de empleados públicos y de empresas del Estado, contribuyéndose así a activar la economía interna.

La clave del programa residía en el pacto social, con el cual se procuraba solucionar el problema clásico de la economía que consistía en la capacidad de los distintos sectores de frenarse mutuamente.

Para ello, Perón recurría a la concertación; hubo concertaciones sectoriales, y una mayor que las subsumía a todas, suscripta por la CGE y la CGT, que estableció el congelamiento de los precios y la supresión por dos años de las convenciones colectivas.

Los primeros resultados de este programa fueron espectaculares: la inflación se frenó bruscamente, mientras que la excelente coyuntura del comercio exterior permitió superar la mala situación en la balanza de pagos y acumular un buen superávit, y las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimulaban el aumento de la actividad interna.

Sin embargo, el aumento del consumo hizo reaparecer la inflación; el aumento del precio del petróleo en el mundo encareció las importaciones y finalmente el Mercado Común Europeo se cerró para las carnes argentinas.

Antes de que el gobierno cumpliera un año, estaba planteada nuevamente la lucha sectorial y los actores del pacto social demostraron escasa capacidad y poca voluntad para cumplirlo: la CGE no representaba eficientemente al empresariado nacional y éste violó el pacto de muchas maneras, ya sea por desabastecimiento, sobrepuestos, mercado negro o

bien, no invirtiendo. Por su parte, la CGT no se hallaba cómoda sin poder utilizar su tradicional táctica de golpear y negociar. No sólo Perón debía subordinar a quien lo apoyaban, sino que los sindicalistas carecían de tradición, instrumentos y objetivos para coger el poder.

Violado de uno y otro lado, el pacto se fue desgastando ante la impotencia de las autoridades. El 12 de junio Perón convocó a una concentración masiva en la histórica Plaza de Mayo, dramáticamente pidió a las partes disciplina y amenazó con renunciar. Fue la última aparición en público antes de su muerte.

En la segunda fase del gobierno peronista (con Perón fallecido) la puja recuperó sus formas clásicas: En la CGT se impusieron los partidarios de la negociación dura, en la mejor tradición vanguardista, encabezada por su sucesor entre los metalúrgicos, Lorenzo Miguel.

Isabel Perón se lanzó a construir una base propia de poder, situando a un grupo de fieles – encabezado por la figura de José López Rega, “el brujo”- en los puestos importantes de poder, rompiendo una a una las alianzas que había tejido Perón.

Se hizo renunciar a Gelbard y se desalojaron las cabezas del sindicalismo opositor: Raimundo Ongaro, Agustín Tosco y René Salamanca perdieron sus respectivos sindicatos.

El pacto social terminó por desaparecer en 1975, cuando arreciaba una crisis económica: los problemas de la balanza de pagos eran muy graves, la inflación estaba desatada, la puja distributiva era encarnizada y el Estado estaba totalmente desbordado.

En ese contexto, el gobierno debió acceder a la tradicional demanda de la CGT y convocó a paritarias, de modo que el ajuste inminente debía realizarse en el mismo momento en que éstas se encontraban discutiendo los problemas salariales, lo que generó una situación inmanejable.

A fines de marzo, la mayoría de los gremios había acordado aumentos del 40 %; el 2 de junio, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, del equipo de López Rega, provocó un *shock* económico al decidir una devaluación del 100 % y un aumento de tarifas y combustibles similar o superior. El “rodrigazo” echó por tierra los aumentos acordados; los sindicalistas volvieron a exigir en las paritarias y los empresarios concedieron aumentos que llegaban al 200 %. La presidenta decidió no homologarlos, lo que culminó en movilizaciones a Plaza de Mayo y un paro general de 48 hs.

Finalmente, López Rega y Rodrigo renunciaron, los aumentos fueron homologados y devorados por la inflación en sólo un mes.

Al mismo tiempo que se daba la lucha en torno del pacto social, se había ido dando una lucha en el seno del peronismo entre la línea que se apoyaba en la vieja tradición peronista, nacionalista y distribucionista y una línea más nueva, la “tendencia revolucionaria”, nutrida fundamentalmente de jóvenes y representada por la Juventud Peronista (JP) y su brazo armado, Montoneros.

En principio, la lucha entre estas dos facciones se había dado por ocupar los espacios de

poder dentro del Estado; ahora bien, con el tiempo la lucha comenzó a desarrollarse bajo la forma del terrorismo. Montoneros se dedicó a eliminar a personajes conspicuos, como José Rucci, secretario general de la CGT. Contra ellos se constituyó otro terrorismo, con aparatos parapoliciales que operaban con el rótulo de Alianza Anticomunista Argentina o Triple A. Los asesinatos se multiplicaron y cobraron víctimas en personas relativamente ajenas al combate.

Montoneros pronto optó por volver a la vieja táctica y volver a la clandestinidad. Hubo más asesinatos, secuestros, intervención en conflictos sindicales y acciones militares de envergadura. En esa línea los siguió el ERP, que desde 1974 había instalado un foco en el monte de Tucumán.

Desde febrero de 1975, el Ejército, convocado por la presidenta, asumió la tarea de reprimir la guerrilla en Tucumán.

Por entonces, el gobierno peronista se acercaba a su fin: el “rodrigazo” había desatado una crisis económica imposible de dominar, consistente en inflación galopante, “corridas” hacia el dólar, aparición de los mecanismos de indexación y, en general, escasas posibilidades para controlar la coyuntura desde el poder. La crisis económica preparó la crisis política.

Luego de la renuncia de López Rega y de Rodrigo, una alianza de políticos y sindicalistas ensayó una salida: Ítalo Luder, presidente del Senado, reemplazó brevemente a Isabel y se especuló con que el cambio fuera definitivo, por renuncia o juicio político. Antonio Cafiero intentó en Economía capear la crisis, pero la inflación desatada, a la que se sumaba una fuerte recesión y desocupación hicieron imposible restablecer el acuerdo entre gremialistas y empresarios. El Congreso, mientras tanto, no fue capaz de reunir el respaldo necesario como para remover a la presidenta.

De modo que, cuando Isabel retornó a la presidencia, se creó una situación insostenible y una aceptación anticipada de cualquier salida.

El 24 de marzo de 1976 los comandantes militares la depusieron y arrestaron, consumando el golpe de Estado que culminaría con la dictadura más sangrienta de la historia argentina.